

## MINUTA LEGISLATIVA

Las condiciones financieras de los países se han visto deterioradas durante los últimos años a raíz de la crisis provocada por el Covid-19 y secundada por la invasión de Rusia a Ucrania, que vino a aumentar aún más las presiones inflacionarias sobre las ya existentes. Como consecuencia, el fuerte aumento del precio del petróleo y los alimentos, ha provocado un incremento generalizado en los precios, y por tanto, una reducción en el poder adquisitivo de las familias de todo el mundo.

Bancos Centrales de diversas naciones han debido intensificar sus estrategias de política monetaria transitando hacia tácticas más agresivas, lo que se traduce en un incremento de tasas de las que no teníamos registro en décadas. Así mismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha decidido corregir a la baja sus proyecciones de crecimiento mundial, disminuyendo sus proyecciones de PIB en 1,1 puntos porcentuales para el presente 2023.

A nivel local, la actividad económica se encuentra en un proceso de ajuste de los desequilibrios macroeconómicos, generados principalmente por las masivas transferencias fiscales otorgadas durante la pandemia, así como los retiros anticipados de fondos de pensiones, que inyectaron excesiva liquidez en la economía nacional.

Aún así, se prevé que durante este 2023 se avance hacia una estabilización durante el primer trimestre. No obstante, las proyecciones son poco alentadoras: Se espera una contracción de 1,5% para este año, según la información suministrada por la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central.

Por otra parte, la inflación no da tregua. Si bien se espera que comience a ceder en los próximos meses, el 2022 cerró con una inflación acumulada de un 12,8%, y enero del presente año ya registró una tasa de 0,8% de incremento mensual.

Así mismo, el precio de la canasta básica de alimentos se ha disparado, alcanzando una variación de 27% anual registrada a noviembre del 2022, afectando de esta forma a las familias más vulnerables del país.

Con este escenario de alta inflación y una economía alicaída, quienes más cargan en sus hombros el peso de la crisis, resultan ser las familias más humildes y de clase media, quienes afrontan el alza del costo de la vida y de los vaivenes de la actividad económica.

A raíz de lo anterior, es que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha decidido activar un paquete de ayudas económicas mediante la presentación de un proyecto de ley (boletín Nº 15.665-05) que contempla quince artículos permanentes, divididos en cuatro títulos, y tres artículos transitorio; y que busca establecer un aporte extraordinario para duplicar el Aporte Familiar Permanente durante este año, un



incremento permanente en la Asignación Familiar y Maternal y el Subsidio Único Familiar (SUF), además de la creación del "Bolsillo Familiar Electrónico".

El ejecutivo busca de esta forma, impulsar cuatro iniciativas: 1) Los artículos 1º al 5º del proyecto, buscan que el actual Aporte Familiar Permanente, que antiguamente se conocía como bono marzo, duplique su monto mediante un aporte complementario, estableciéndose en \$59.457 el monto total del bono. Esta iniciativa, busca que el beneficio pueda llegar a más de tres millones de personas pertenecientes a 1,5 millones de hogares. Así, quienes resulten beneficiados con esta iniciativa, recibirían el Aporte Familiar Permanente, además de un segundo pago extraordinario por el mismo monto a partir del mes de marzo, totalizando un monto de aproximadamente 120 mil pesos.

2) Los artículos sexto y séptimo de la iniciativa del Gobierno contemplan un incremento permanente de un 20% en el Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar, a partir de mayo del presente año, estableciéndose de la siguiente manera: i) Se incrementa a \$20.328 por carga, para aquellos beneficiarios cuyos ingresos mensuales no excedan los \$429.899; ii) Se aumenta a \$12.475 por carga, para los beneficiarios que presentan ingresos no superiores a \$627.913; y iii) Se actualiza a \$3.942 por carga, para los beneficiarios cuyos ingresos mensuales sean superiores a los \$627.913, y no excedan los \$979.330.

3) Así también, el proyecto contempla en su artículo 7º, la puesta en marcha de un procedimiento de obtención automática del SUF, en beneficio de los niños, niñas y adolescentes que perteneciendo al 40% de la población más vulnerable, no acceden actualmente la beneficio por efecto de los trámites de postulación. Este universo de beneficiarios llegaría al orden de las 940 mil personas.

4) Finalmente, los artículos 8º al 14º, dicen relación con la creación del "Bolsillo Familiar Electrónico", que es un sistema que busca de forma integrada, alcanzar una transferencia estatal de \$13.500 mensuales por causante, con el objetivo de poder amortiguar el alza en el precio de la canasta básica de alimentos y cubriendo -según las estimaciones del Ministerio de Hacienda- hasta un 20% del valor de las compras relacionadas a los alimentos. La hoja de ruta propuesta por el Gobierno, establece que dicho mecanismo comience a operar desde el 1 de mayo del presente año, y con fecha de caducidad el 31 de diciembre del 2023.

Este beneficio automático, al que no se postula, será depositado mensualmente a los beneficiarios que posean Cuenta RUT del Banco Estado, pudiendo ser utilizado el monto señalado en comercios del rubro de la alimentación, como supermercados, almacenes y ferias libres que cuenten con sistema de pago mediante tarjeta de débito. Así mismo, en caso de que el monto no sea ocupado en su totalidad, el saldo será traspasado y acumulado pudiendo ser utilizado en el o los meses siguientes, según corresponda.





## MINUTA LEGISLATIVA

Analizada en su amplio espectro, la Reforma Procesal Penal ha sido exitosa en lo que dice relación con establecimiento de garantías respecto de los procesos acusatorios propios de un Estado de Derecho.

Chile, es mirado como un ejemplo en Iberoamérica, al lograr acortar los tiempos de los procesos y números de personas que se encuentran privadas de libertad a la espera de un juicio. Esto, salvaguardando las garantías mínimas del debido proceso, incorporando el derecho a la defensa letrada, la oralidad e inmediación judicial y la posibilidad de presentar pruebas y contrastar las pruebas del cargo que se imputa.

En tanto, los delitos van al alza. Así lo confirman las cifras oficiales suministradas tanto por Carabineros como la Policía de Investigaciones. Las recientes encuestas de victimización impulsadas por la Fundación Paz Ciudadana, también confirman el incremento de la inseguridad ciudadana; lo que evidencia la necesidad de replantear una reforma integral al actual Sistema Penal, que, conservando la base que lo ha hecho exitoso, pueda reformular y actualizar sus cuadros, considerando la opinión de expertos y académicos en la materia.

Los delitos de homicidio, lesiones contra las personas, narcotráfico y crimen organizado, junto con tener como denominador común el presentar un alto índice de violencia, también comparten la preocupante realidad de que han aumentado de manera significativa durante los últimos años. Según registros policiales, durante el año 2019, se cometieron más de 550 mil delitos de este tipo, que son considerados de mayor connotación social.

El hurto, encabeza la lista de los delitos con mayor frecuencia (un 30%), y es seguido por el robo con intimidación, que alcanza un 14% del total de delitos. Más atrás, le siguen las lesiones leves, las lesiones graves o gravísimas, que también representan un 14%. Luego, los robos de vehículos y/o accesorios de los mismos, registra un 10%; mientras que los robos en lugar no habitado alcanzan un 9%.

Los expertos en el sistema, acusan que en Chile la probabilidad de condena para los delitos de mayor connotación social es muy baja; advirtiéndole que, de cada 100 casos policiales relacionados a robos, solo 12 de ellos termina recibiendo una sentencia condenatoria. Para el caso de los robos no violentos, solo 6 de cada 100 de ellos recibe una condena; y que, para los hurtos, solo 1 de cada 10 termina recibiendo sanción.

Más preocupante aún, resulta el hecho de que la gran mayoría de los delitos de mayor connotación social, son cometidos precisamente por reincidentes.

Según informa Carabineros, de un total de 106.662 detenciones registradas en el año 2018, y que fueron calificadas como comisión de delitos de mayor connotación



social, 61.958 de estas, fueron cometidas por reincidentes; cifra que equivale a un 58,1% del total. Así mismo, al año siguiente, 2019, esta misma tasa alcanzó un 59%. Buscando hacerse cargo de esta realidad, y configurando nuevas alternativas para afrontar la delincuencia, es que los Senadores Kast, las Senadoras Ebensperger y Rincón, junto al Senador Cruz-Coke y Ossandón, han ingresado a discusión un proyecto de ley (boletín N° 15.661-07) que busca mejorar la persecución penal, con especial énfasis en materia de reincidencia y aquellos delitos que representan mayor connotación social.

La iniciativa de los parlamentarios persigue en primera instancia modificar el Código Penal, unificando el sistema de determinación de penas, a fin de incrementar la capacidad disuasiva del sistema penal, mediante el aumento de la probabilidad de que los responsables de los hechos delictivos, reciban una pena prevista por el legislador según el delito que se le imputa, con un mínimo de un año, y que permita disponer de efectivas oportunidades para su resocialización. De igual modo, se busca diferenciar a los delincuentes reincidentes de los primerizos, permitiendo a estos últimos acceder a beneficios especiales destinados a su resocialización.

Por otra parte, los Senadores plantean la posibilidad de suspender de manera condicional el procedimiento, siempre y cuando cuente con el acuerdo del Fiscal y el imputado, cuando este último acepte someterse de manera voluntaria a un tratamiento de desintoxicación de drogas, alcoholes o ambos, en aquellos casos en que la dependencia de tales sustancias haya sido considerada como determinante para la comisión del delito que se imputa.

También, se busca establecer el impedimento para los delincuentes habituales y refractarios a las medidas de la Ley N° 18.216, que establece las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad, de acceder a la suspensión condicional del proceso.

El proyecto busca introducir un sistema general de determinación de las penas. Con el objetivo de evitar distorsiones, se persigue configurar un mecanismo que permita regular el tratamiento de las circunstancias atenuantes y agravantes, estableciendo un efecto determinado y de carácter significativo para el reconocimiento de responsabilidad en caso de procedimientos abreviados y simplificados, que otorgue seguridad al imputado de la rebaja que recibirá, además de fijar un margen de negociación para el Fiscal. Para los casos en donde se registre una agravante de reincidencia, la iniciativa busca establecer un efecto especial, para darle un tratamiento diferente frente al primerizo, imponiendo siempre la pena en su grado superior, de ser compuesto o en su mitad superior, de constar en un solo grado.

El proyecto busca eliminar los artículos 65 al 69 del Código Penal, que permiten a los jueces ordenar penas inferiores a las previstas de manera automática en la ley, y se pretende reemplazar por un nuevo artículo 65, que establezca las atenuantes y



agravantes que deben aplicarse dentro del grado o grados previstos por la ley, considerando el número y entidad de los atenuantes y agravantes y la extensión del mal causado, para efectos de determinar la cuantía precisa de la pena en cuestión.

De igual forma, se pretende entregar un tratamiento especial a las agravantes de reincidencia establecidas en el artículo 12 del Código Penal, entregando al juez la facultad de imponer en su grado máximo si es una pena compuesta, o su mitad superior si es una pena de un solo grado. Finalmente, se establecen los casos en que la pena pueda rebajarse en un grado, cuando el imputado acepta los hechos y las responsabilidades en un procedimiento abreviado o simplificado, y cuanto existe un eximente de responsabilidad penal incompleto. Si el juez así lo estimase, pudiese declarar esas atenuantes como muy calificadas y rebajar la pena prevista por la ley en un grado.

El proyecto de los legisladores busca modificar la duración de los grados de las penas de presidio y reclusión menores, estableciendo la pena de un año de privación de libertad como el mínimo para cualquier crimen o simple delito.

Expertos en materia penal, señalan que las penas privativas de libertad inferiores a un año, no permiten ejecutar programas de resocialización que resulten efectivos, ni tampoco disuaden de la comisión de futuros delitos. Así, los legisladores proponen modificar la duración de los grados de las penas privativas de libertad, comenzando su cumplimiento en un año como pena mínima, la que se busca configurar como la pena mínima a imponer en la comisión de cualquier crimen o delito simple.

La iniciativa legal que promueven los parlamentarios busca eliminar de esta manera la actual pena de prisión que va de 1 a 60 días, y se establece que las penas de presidio, reclusión, confinamiento, extrañamiento y relegación menores y de destierro, comiencen en 1 año, y ya no en 61 días como es actualmente.

También, el texto en cuestión propone suprimir las penas alternativas de multas para los delitos de mayor connotación social, además de elevar a calidad de simples delitos, imponiéndoles el grado mínimo de pena. Así, los delitos que quedan afectos a esta modificación son los delitos contra la propiedad y contra las personas, y los relativos a su libertad e indemnidad sexual.

El segundo término, la iniciativa sugiere modificaciones al actual Código Procesal Penal, limitando el principio de oportunidad establecido en el artículo 170 del texto. Este principio, permite a los Fiscales no iniciar una persecución de carácter penal o abandonar la que ya está en curso, cuando se trata de hechos que no comprometen gravemente el interés público, a menos que la pena mínima del delito excediere el presidio o reclusión menores en grado mínimo o que se trate de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. A estas excepciones el proyecto incorpora la de reincidencia; no pudiendo ejercer el principio de oportunidad respecto de quienes, dentro de los cinco años anteriores a la ocurrencia



de los hechos, ya hubieren sido beneficios dos o más veces con el ejercicio del principio de oportunidad, con una suspensión condicional del procedimiento o con un acuerdo reparatorio. De igual modo, tampoco procederá respecto de quienes contaren con una o más condenas previas.

Junto con lo anterior, se plantean modificaciones al artículo 237 del Código Procesal Penal, en lo que respecta al régimen de suspensión condicional del procedimiento, excluyendo a los reincidentes, buscando no fomentar la conducta criminal habitual y manteniendo la posibilidad de otorgar una oportunidad a los primerizos.

Se busca establecer como requisito, que el imputado pueda optar a una suspensión condicional del procedimiento que este no hubiere consentido, en los cinco años previos a los hechos, a dos o más suspensiones condicionales del procedimiento o acuerdos reparatorios. Así también, se establece que la aceptación de la suspensión condicional del procedimiento supone la aceptación de los hechos y la responsabilidad de ellos por parte del imputado.

Buscando promover la reinserción social, los parlamentarios proponen suspender condicionalmente el procedimiento para el tratamiento de drogas, alcohol y trastornos conductuales. El proyecto propone incorporar un artículo 237 bis al Código Procesal Penal, evitando la internación carcelaria de quienes padecen dependencias de alcohol y/o drogas, o de un trastorno de conducta tratable, buscando suspender condicionalmente el procedimiento, con acuerdo del Fiscal y el imputado, cuando este opte por someterse voluntariamente a un tratamiento de desintoxicación y deshabituamiento de drogas, alcohol o ambos, en aquellos casos en que haya sido probada la dependencia de tales sustancias como determinantes para la comisión del delito, y siempre y cuando la pena en cuestión no exceda de cinco años de privación de libertad. Una vez concluido el tratamiento al cual se somete el imputado, se procederá a realizar una audiencia en que un representante de la institución que trató al imputado, exponga los antecedentes: Si el tratamiento fue culminado con éxito, se determinará la suspensión condicional. En caso contrario, se reanudará el procedimiento conforme a las reglas generales.

En último lugar, el texto persigue modificar los procedimientos abreviados y simplificados, buscando facilitar los acuerdos y favoreciendo a quienes intentan acceder a ellos y a la imposición de las penas previstas por ley en cada uno de sus casos. Se busca perfeccionar el sistema, no estimulando de manera innecesaria una negociación entre el Fiscal y el imputado de una pena 'hacia la baja', en caso de existir suficientes evidencias de la responsabilidad del imputado.

